



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05001-31-05-014-2015-01770-01
Demandante	Gloria Mery Álvarez Acevedo
Demandado	María Rocío Arboleda Escobar
Asunto	Apelación auto
Procedencia	Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Nulidad

Medellín, enero treinta y uno (31) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la codemandada María Rocío Arboleda Escobar, contra el auto proferido el 24 de octubre de 2022, por medio del cual se denegó la solicitud de nulidad propuesta por el mismo, lo anterior, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora GLORIA MERY ALVAREZ ACEVEDO en contra de la señora MARÍA ROCÍO ARBOLEDA

ESCOBAR, proceso al cual fue vinculado como litisconsorte necesario la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. Radicado 050013105014201501770.

1. ANTECEDENTES

La señora GLORIA MERY ALVAREZ ACEVEDO, llamó a juicio ordinario laboral a la señora MARÍA ROCÍO ARBOLEDA ESCOBAR, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre las partes en el periodo 01 de enero de 1999 y el 22 de enero de 2014, el cual finalizó de manera injusta y unilateral por el empleador; como consecuencia, se condene a la accionada al pago de las prestaciones sociales, indemnización por despido injusto, al pago de las horas extras, la indemnización de perjuicios por la ni entrega de la dotación de calzado y vestido de labor, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, auxilio de transporte, salarios insolutos, reajuste salarial y la indexación de las condenas.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 18 de abril de 2016, admitió la demanda, disponiendo la notificación de la demandada y citó a Porvenir S.A, en calidad de litisconsorte necesario por pasiva. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2016, se ordenó el emplazamiento, designando curador ad litem ante la no comparecencia de la accionada al proceso, curador que fue notificado el 09 de marzo de 2018, según consta a folio 90 del anexo 02 del expediente digital

El 20 de marzo de 2018, la curadora ad litem presentó solicitud de nulidad, atendiendo a que en el proceso obran varias actuaciones impulsadas por el doctor Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, cuando la única facultada para ello era la apoderada Ana María Rodríguez Soto, conforme al poder anexo, presentándose una indebida representación de la parte. Frente a lo anterior, el Juzgado mediante auto del 23 de marzo de 2018, puso en conocimiento de la demandante la situación descrita por la curadora, conforme lo dispuesto en el artículo 145 del 145 C.P.C., corriendo traslado por el término de 3 días, para lo que se considerara pertinente, procediendo la apoderada de la actora a sustituir el poder al profesional Gabriel Jaime Rodríguez.

En audiencia pública celebrada el 29 de mayo de 2019, el funcionario de primer grado declaró improcedente el incidente de nulidad propuesto por la curadora ad litem, adicionalmente, impuso la carga a la parte demandante de rectificar la dirección de notificación de la demanda, incluyendo el lugar de trabajo y en caso de que exista otra dirección solicite el cambio de dirección para notificar nuevamente.

En atención a la citación enviada a la nueva dirección informada por la parte actora a efectos de realizar la notificación de la demanda, la señora María Rocío Arboleda Escobar, compareció directamente al proceso el 23 de agosto de 2019, como se observa en el acta visible a folio 136 del anexo 02 del expediente digital, oportunidad en la cual se le otorgó un término de 10 días para contestar la demanda, situación que tuvo lugar, el 6 de septiembre de 2019, ocasión en la cual se formuló incidente de nulidad, invocándose para ello el numeral 8° del artículo 133 del CGP.

2. AUTO RECURRIDO

En audiencia pública celebrada el 24 de octubre de 2022, el funcionario de primera instancia negó la solicitud de nulidad, ello luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite del proceso y tras considerar que no se puede concluir que la parte actora actuó de mala fe y temerariamente, lo que será materia de discusión en el debate probatorio, resaltando que la parte demandante trató de ser diligente, brindar la información sobre una segunda dirección donde se pudiera ubicar la demandada, solicitar autorización para notificación, la cual resultó efectiva y permite subsanar la omisión que en un principio se concretó en que la curadora estableció que la nomenclatura informada no existía, realizando hincapié en que para efectos prácticos se tiene que la última notificación surtió su cometido, es decir la posibilidad de que la demandada se enterara de la existencia de la demanda y pudiera comparecer en uso de su derecho de defensa el cual en ningún momento se le ha conculcado por parte del despacho, pues tendrá la participación en todas las etapas procesales pendientes del artículo 77 del CPT incluso para auspiciar nuevamente la fase de conciliación como primigenia etapa.

3. APELACION DEMANDADA

Inconforme con lo resuelto, el procurador judicial de la señora María Rocío Arboleda Escobar, interpuso recurso de apelación en subsidio al de reposición, señalando que, si bien dentro del sistema procesal laboral hay unas garantías frente a los trabajadores, no se pueden dejar de lado las irregularidades que se han cometido en el proceso, empezando porque de una forma mal intencionada en el cuerpo de demanda se coloca una dirección inexistente, siendo extraño que pueda dársele credibilidad a una manifestación de que no se ve ánimo de mala fe

de la demandante, porque el día de la audiencia cuando está siendo interrogada ella dice que ella había ido al pasaje la Bastilla donde la señora labora, sino hubiera sido por esa intervención, la señora jamás hubiera aportado la verdadera dirección.

Sostuvo que admitió la demanda faltando un requisito formal, haber dado la verdadera dirección de donde prestó el servicio, y dos años después se corrige ese hecho, insistiendo que no es voluntariamente, si no que la demandante en la audiencia se ve presionada a dar la información.

Adujo que la curadora encontró una serie de irregularidades del proceso, las cuales no se pueden aceptar, pues la accionante le entrega el poder a la doctora Ana María, cuando ella nunca actuó, actuó el doctor Gabriel sin poder, por lo que todas las actuaciones derivadas del proceso generan una nulidad, porque todo lo que este supeditado a la intervención del abogado Gabriel Jaime son pruebas ilegales, no se puede legalizar partiendo de la base de que posteriormente la doctora Ana le otorga un poder, porque cuando ello ocurre ya se habían realizado unas actuaciones, resalta que hay una normatividad constitucional que se debe aplicar, que el Código General del Proceso no está por encima de la normatividad constitucional y el artículo 29 es muy claro en decir cuando se viola el debido proceso y aquí se viola el debido proceso desde que se admite la demanda, porque la misma debió ser rechazada, por lo que solicita se revise la actuación y se declare la nulidad de todo el proceso, desde el mismo momento de la admisión de la demanda y se deje sin fundamento la actuación posterior.

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal no se pronunció ninguno de los apoderados de las partes.

5. CONSIDERACIONES

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con el artículo 57 de la ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS modificados por los artículos 29 y 35 de la ley 712 de 2001.

3.1. Problema Jurídico

Deberá resolver la Sala:

¿Si en el trámite de la referencia se configura causal de nulidad derivada de la falta de requisitos formales para la admisión de la demanda o de las actuaciones desplegadas por parte del profesional del derecho Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, sin contar con poder que lo facultara para ello?

5.2. Tesis.

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, (i) la demanda satisface los requisitos de forma contemplados en el artículo 25 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, no configurándose causal de nulidad alguna derivada de su admisión, (ii) no es procedente en esta oportunidad determinar, si son inválidas las actuaciones desplegadas por el abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, teniendo en cuenta que dicha situación fue resuelta en audiencia celebrada el 29 de mayo de 2019, decisión respecto de la cual no se

interpuso recurso alguno, aunado a ello, dicha situación no fue expuesta en la solicitud de nulidad inicialmente formulada, en consecuencia, la providencia recurrida debe ser CONFIRMADA.

5.2. **Premisas Normativas**

El artículo 133 del Código General del Proceso, consagra de manera taxativa las causales de nulidad procesal, señalando en el numeral 8°:

“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. (subraya de la Sala)”

A su vez el párrafo de la norma señala que *“Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”*.

En igual sentido, se advierte que la devolución de la demanda solo podrá realizarse por el incumplimiento de los requisitos formales del artículo 25 ibídem, que dispone:

“Artículo 25. Forma y requisitos de la demanda. La demanda deberá contener:

- 1. La designación del juez a quien se dirige.*
- 2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.*
- 3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.*
- 4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 5. La indicación de la clase de proceso.*
- 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.*
- 7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.*
- 8. Los fundamentos y razones de derecho.*
- 9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y*
- 10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.*

Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo.

5.3. Caso Concreto

En el asunto bajo análisis, se tiene que a folios 161 y 162 del anexo 02 del expediente digital, reposa el incidente de nulidad presentado por el apoderado de la señora María Rocío Arboleda Escobar, mismo que sustenta en el actuar de la demandante y su apoderado, el cual califica de mala fe, por ocultar información vital, como lo es la dirección de notificación de la demandada, considerando que ello tipifica una causal de nulidad de todo lo actuado desde el momento de la admisión de la demanda.

Al respecto, ha de anotarse, que, si bien resulta cuestionable el hecho de que la parte actora informe en el escrito de demanda una dirección que conforme a la certificación de la empresa de correo y las averiguaciones que realizó en su momento la curadora ad litem, es inexistente, ello por sí solo no puede ser calificado como un actuar temerario o de mala fe, como lo aduce el incidentista, adicionalmente, si bien uno de los requisitos formales de la demanda es la indicación del domicilio y la dirección de los partes, se tiene como la activa cumplió con dicho requisito, siendo imposible para el Juzgado determinar de manera inicial, al momento de efectuar el estudio de la demanda para su admisión o devolución, si alguna información de la suministrada en el escrito inaugural es o no real, en tal sentido, no constituye causal de rechazo de la demanda, que se haya indicado como dirección para efectos de la notificación de la accionada una dirección errada, siendo claro, que debe ser en el trámite del proceso que se analice la conducta procesal de la parte.

No desconoce esta Sala, que en la gestión del litigio que se analiza, se han presentado varias situaciones irregulares, como lo es por ejemplo dar trámite a los memoriales allegados por el profesional del derecho Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, sin que estuviera acreditada su calidad de apoderado, irregularidad que se precisa es subsanable conforme al artículo 133 del Código General del Proceso y no generan nulidad alguna, ni conculca el derecho fundamental al debido proceso, como lo plantea el apoderado.

Ahora, llama la atención de esta Colegiatura que en la sustentación del recurso de alzada, el apoderado haga énfasis en la validez de las actuaciones desplegadas por el abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, sin que se hubiera acreditado el poder para actuar, punto que no fue planteado en el incidente inicial y sobre el cual no resulta procedente efectuar un pronunciamiento de fondo, en tanto que dicha

inconformidad ya había sido resuelta por el Juzgado en audiencia pública celebrada el 29 de mayo de 2019, en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad presentado por la curadora ad litem, decisión respecto de la cual no se interpuso recurso alguno.

Y si en gracia de discusión se entrara a resolver sobre este punto, resulta pertinente traer a colación el artículo 136 del Código General del Proceso, el cual señala:

“Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

(...)

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.”

Conforme a las preceptiva en cita, es evidente para este Juez Plural, que la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de la llamada a juicio, relacionada con las actuaciones del abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, no se presentó en la oportunidad procesal correspondiente y en tal sentido, de haber existido una causal para nulitar la actuación, la misma se encuentra saneada, máxime si se tiene en cuenta, que la legitimada para alegar la nulidad por indebida representación era la propia demandante, Gloria Mery Álvarez Acevedo y no lo hizo, pese a que el Juzgado mediante auto del 23 de marzo de 2018, puso en conocimiento de la misma la situación que se estaba presentando y otorgó un término de 3 días, para que si fuera del caso alegara la nulidad.

De otra parte, se advierte que al momento de efectuar la notificación personal de la señora María Rocío Arboleda Escobar, se le indica que cuenta con el término

de 10 días para contestar la demanda, cuando procesalmente debía asumir el proceso en estado en que se encontraba, no obstante, tal actuación resulta ser más favorable a la demandante porque se le da la plenitud de garantías, dejando tácitamente sin efectos la actuación de la curadora ad litem.

En este escenario se concluye que los argumentos que sustenta la nulidad invocada, no tienen vocación de éxito, al no configurarse ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, así como tampoco la afectación de los derechos constitucionales de defensa y contradicción de la parte accionada, a quien el Juzgado le ha brindado las oportunidades procesales para ejercer su defensa, como lo es presentar una nueva respuesta a la demanda.

Por lo antes expuesto, es procedente CONFIRMAR la decisión apelada.

6. DECISION

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,

RESUELVE


PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto proferido el 24 de octubre de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora GLORIA MERY ALVAREZ ACEVEDO en contra de MARÍA ROCÍO ARBOLEDA ESCOBAR.

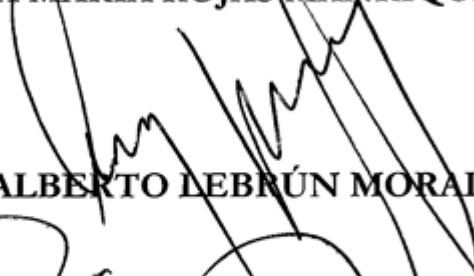
Segundo: Sin **COSTAS** en esta instancia.


Tercero: Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, con la inclusión de las actuaciones cumplidas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**, de conformidad con el artículo

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado por estado No. 015 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 01 de febrero de 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario